

Santiago, diecisiete de febrero de dos mil veintidós.

VISTOS:

En causa RUC 1810046606-2, RIT N° 2662-2018, del Juzgado de Garantía de Los Andes, por sentencia de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se condenó a Jaime Carvajal Quintero, a la pena de quinientos cuarenta días de presidio menor en grado mínimo, como autor del cuasidelito de homicidio, descrito y sancionado en el artículo 490 y penado en el artículo 492, ambos del Código Penal, cometido el 12 de abril del 2018, en perjuicio de María Isabel Díaz Moyano y las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y del permiso o licencia para conducir vehículos motorizados por el lapso de dos años.

En contra de esa decisión la defensa del acusado, interpuso recurso de nulidad, el que fue conocido en la audiencia pública celebrada el veintiocho de enero último, disponiéndose *-luego de la vista-* la notificación del presente fallo vía correo electrónico a los intervinientes, según consta del acta levantada en su oportunidad.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de nulidad deducido en autos se funda, en primer término, en la causal de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 329 inciso 6 del Código Procesal Penal y artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.

Refiere que durante la celebración de manera telemática de la audiencia del día 15 de Abril y luego de los alegatos de apertura, prestó declaración el imputado y en momentos que éste declaraba, el Tribunal se percató que seis testigos del



Ministerio Público, no habían sido retirados de la audiencia, por lo que escucharon tanto los alegatos como parte importante de la declaración del imputado, lo que a juicio de la Defensa atenta contra la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 3, de la Constitución Política de la República al infringir de manera clara el precepto del artículo 329 inciso 6 del Código Procesal Penal.

Solicita se anule la sentencia, dictando una de reemplazo, sin nueva audiencia pero separadamente que absuelva de los hechos materia del requerimiento del Ministerio Público, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, en relación a la causal invocada, ésta dice relación con la garantía constitucional contenida en el artículo 19 numeral 3° de la Constitución Política de la República, en su arista del derecho a defensa, y se funda en que los testigos del ente persecutor habrían escuchado los alegatos de apertura y los primeros minutos de la declaración del imputado, por lo que su declaración se habría “contaminado”, con lo advertido previamente en la referida audiencia.

TERCERO: Que, la Constitución Política de la República garantiza a toda persona el derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale, correspondiendo al legislador arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos y establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.

CUARTO: Que, se ha establecido que la causal esgrimida de nulidad, como medio para la impugnación de las sentencias definitivas, tiene como finalidad asegurar el irrestricto respeto a las garantías y derechos fundamentales. Se trata de un recurso restringido de las causales que lo hacen procedente, como por los



finés que persigue, así como por la rigurosidad exigida para fundamentar las causales invocadas.

QUINTO: Que, para que proceda esta causal, se exige que el vicio sea sustancial y trascendente, de manera que éste infrinja, coarte o limite la garantía del debido proceso, de consiguiente se exige, para su procedencia no solo que la infracción de garantías constitucionales sea efectivamente verificable, sino que también la transgresión denunciada cause un perjuicio constatable.

SEXTO: Que, asimismo para resolver acerca de la causal principal del recurso en examen es del caso subrayar que el artículo 377 del Estatuto Procesal Penal, prescribe que si la infracción invocada como motivo del recurso se refiriere a una ley que regule el procedimiento -como acontece en la especie-, el recurso sólo será admisible cuando quien lo entablare hubiere reclamado oportunamente del vicio o defecto.

SÉPTIMO: Que, resulta evidente, que la situación denunciada en el libelo debió y pudo haber sido reclamada oportunamente por el recurrente en forma previa a la dictación del fallo, por ejemplo, en su alegato de clausura o por la vía de la reclamación de nulidad procesal, por lo que el vicio denunciado adolece de la falta de preparación que exige la ley.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, la garantía del debido proceso la constituyen a lo menos un conjunto de derechos que la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten



los procedimientos fijados en la ley, que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas (SCS Rol N° 6.345–2007 de 9 de enero de 2008, Rol N° 1.414–2009 de 19 de mayo de 2009, Rol N° 4.164–2009 de 1 de septiembre de 2009, Rol N° 3.909–2009 de 15 de septiembre de 2009, Rol N° 6.165–2009 de 4 de noviembre de 2009, Rol N° 6.742–2009 de 21 de diciembre de 2009, 990-2010 de 3 de mayo de 2010, Rol N° 25.641-2014 de 9 de diciembre de 2014, Rol N° 1323-2015 de 24 de marzo de 2015 y Rol N° 12.885-2015 de 13 de octubre de 2015).

Así entonces, no hay discrepancias en aceptar que el derecho al debido proceso está integrado por la obligación de respetar los procedimientos fijados en la ley, desde que en todo proceso penal aparece comprometido el interés público de la comunidad en el esclarecimiento de los sucesos y el castigo de los delitos, como también la absolución del inocente de acuerdo a una serie de actos de carácter formal y preestablecidos, que den garantías del respeto de la presunción de inocencia, la independencia del tribunal, la igualdad entre las partes y la protección de los intereses del afectado. Este interés debe ser tutelado por el Ministerio Público como órgano predispuesto por el Estado precisamente con ese propósito, que incluye por cierto la promoción de la acción penal y la carga de probar la culpabilidad del inculcado, al mismo tiempo que el tribunal debe actuar con neutralidad y objetividad, de manera que no abandone su posición equidistante de las partes y desinteresada respecto del objeto de la causa (SCS Rol N° 21.408-2014 de 8 de septiembre de 2014 y Rol N° 1323-2015 de 24 de marzo de 2015).



NOVENO: Que en el mismo sentido y complementando lo anterior, la doctrina ha insistido en que no toda infracción determina automáticamente la nulidad del juicio y la sentencia, ya que el carácter sustancial exigido supone que la infracción sea de tal entidad que comprometa los aspectos esenciales de la garantía, decisión que debe ser adoptada sobre la base del criterio de proporcionalidad (Horvitz, M. y López, J. Derecho Procesal Penal Chileno, Ed. Jdca. de Chile, 1a ed., 2004, T. II, p. 414). En la misma línea se demanda que la infracción produzca “consecuencias efectivas y constatables” para el recurrente de nulidad (Rieutord, A. El Recurso de Nulidad en el Nuevo Proceso Penal., Ed. Jdca. de Chile, 2007, p. 43).

Estas opiniones han sido compartidas por esta Corte en innumerables pronunciamientos pretéritos, al dictaminar que el agravio a la garantía del debido proceso debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrase, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso. Asimismo, se ha dicho que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento (SCS Roles N° 2.866-2013 de 17 de junio de 2013, 4.909-2013 de 17 de septiembre de 2013; 21.408-14 de 8 de



septiembre 2014; 28.109- 18, de 4 de febrero de 2019 y 21-2019, de 18 de febrero de 2019).

DÉCIMO: Que, del examen de estos autos, aparece, tal como se expuso, que el recurrente no preparó el recurso de nulidad, estando obligado por ley a hacerlo, siendo incluso una exigencia de admisibilidad del mismo. Contrariamente a lo sostenido por la Defensa, el vicio denunciado se desarrolló en audiencia y no en la dictación de la sentencia, no habiendo tampoco el recurrente evidenciado al Tribunal los hechos denunciados en recurso.

En consecuencia, no concurren en la especie los presupuestos establecidos en la ley para el acogimiento del presente recurso de nulidad, más aun tratándose éste de un recurso extraordinario, que se caracteriza, entre otras, por la rigurosidad exigida a los recurrentes para fundamentar las causales invocadas, tal como se indicó, todo lo cual resta legitimación a su actual protesta.

UNDÉCIMO: Que, ahora bien, tal como se explicitó previamente, el defecto en que el recurrente hace consistir la infracción al debido proceso, dice relación con la circunstancia que seis de los testigos escucharon durante seis minutos aproximadamente, los alegatos de apertura y la declaración del condenado, vicio que –según esgrime el impugnante- habría “contaminado” la declaración de los deponentes, afectando con ello el derecho a defensa de su representado.

DUODÉCIMO: Que, en el marco de las reflexiones antes desarrolladas, y ahora, a mayor abundamiento, este vicio denunciado no aparece revestido de la gravedad exigida, al examinarse el desarrollo del juicio y la valoración de la prueba, puesto que los testigos del Ministerio Público declararon sobre el lugar donde ocurrió el accidente, -padres de la víctima, una vecina y el funcionario



policial que acudió al lugar-, declaraciones que el tribunal en la sentencia examinó y ponderó en su conjunto con el resto de los medios de prueba incorporados en el juicio, para determinar las características del sector donde ocurrieron los hechos, los que, por lo demás no fueron controvertidos por la defensa ni en el juicio ni en este recurso.

De aquí que, como se expuso, la actuación que se pretende cuestionar carece de la trascendencia y entidad que es indispensable para admitir la configuración de la causal de nulidad alegada, razones por las cuales la causal impetrada en forma principal no podrá prosperar.

DÉCIMO TERCERO: Que, como causal subsidiaria de nulidad, la defensa invocó aquella contenida en el artículo 373 b) del Código Procesal Penal, por infracción de los artículos 162 N° 4, 166, 171 de la Ley N° 18.290, en relación al 490 y 492 del Código Penal.

Sostiene que el Tribunal consideró que a la peatona le asistía una especie de derecho preferente por sobre el tránsito vehicular, no obstante haber cruzado en un lugar no habilitado y que fue la víctima quien no tomó el mayor de los resguardos, al no asegurarse -que existían vehículos próximos en la ruta. En consecuencia estima que, la sentenciadora efectuó una errónea aplicación de las normas del tránsito, al estimar que el acusado es el responsable del accidente, atribuyéndole la responsabilidad en el mismo.

Por lo anterior, solicitó la nulidad del juicio y la sentencia, se determine el estado en que ha de quedar el procedimiento y se remita los antecedentes al tribunal no inhabilitado que corresponda para que disponga la realización de un nuevo juicio oral.



DÉCIMO CUARTO: Que en relación a este reclamo, debe tenerse presente que la Juez de la instancia lo desestimó por las siguientes consideraciones expresadas en el razonamiento 9° del fallo:

“Que de esta manera, ponderados de conformidad a la ley los medios de prueba rendidos durante la audiencia de juicio, es decir con libertad, pero sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia, ni los conocimientos científicamente afianzados, el Tribunal tuvo por demostrado, más allá de toda duda razonable, que el 12 de abril del 2018, aproximadamente a las 7:00 horas de la mañana, el acusado Carvajal Quintero Jaime conducía la camioneta placa patente HFYP-57 en dirección Sur Oriente a una velocidad de más de 95 kilómetros (el GPS del vehículo conducido por el acusado indica 98 KM por hora) en zona rural, oscuro, donde existían casas, paraderos y con límite de velocidad de 70 kilómetros impactando a una menor que cruzaba la ruta por un paso sin cebra, pero tomando las precauciones necesarias, producto de esta maniobra, el vehículo pasó a llevar con su parte delantera a la víctima matándola, hecho acaecido en la comuna de San Esteban .

Que en nada hace variar el hecho acreditado las pericias de la defensa por cuanto estas se limitan a señalar que su representado conducía con preferencia ante la víctima por cuanto esta cruzó sin tener paso de cebra, exponiéndose ella al riesgo y a los resultados, sin hacerse cargo de que existían señaléticas que advertían peatones en la vía, disminución de velocidad y que el GPS de su representado marco 98 kilómetros como la velocidad del móvil conducido por el acusado, en zona de 70”.



DÉCIMO QUINTO: Que a fin de dirimir lo planteado en el recurso, es menester estar a lo asentado por la Juez de la instancia al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, que esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, intente una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el tribunal del grado, porque ello quebranta de manera evidente las máximas de oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia, que rigen la incorporación y valoración de la prueba en este sistema procesal penal, puesto que lo contrario implicaría que este tribunal de nulidad, únicamente de la lectura de los testimonios “extractados” en la sentencia, podría dar por acreditados hechos distintos y opuestos a los que los magistrados extrajeron de esas deposiciones, no obstante que estos últimos apreciaron íntegra y directamente su rendición, incluso el examen y contra examen de los contendientes, así como hicieron las consultas necesarias para aclarar sus dudas, lo que de aceptarse, simplemente transformaría a esta Corte, en lo atinente a los hechos en que se construye esta causal de nulidad, en un tribunal de segunda instancia, y todavía más, en uno que -a diferencia del a quo- dirime los hechos en base a meras actas o registros -eso es sino el resumen de las deposiciones que hace el tribunal oral en su fallo-, lo cual, huelga explicar, resulta inaceptable. Aclarado lo anterior, se procederá al estudio de las protestas fundantes del recurso con arreglo a los hechos que en la decisión se tienen por demostrados.

DÉCIMO SEXTO: Que la causal de la letra b) del artículo 373 supone sin lugar a dudas que el recurrente acepta los hechos tal y como han sido fijados en el fallo, esto es, que los hechos que el tribunal ha tenido por acreditados luego de la



valoración de la prueba rendida son inamovibles. Luego el recurso de nulidad, debe entenderse dirigido únicamente al eventual error que observe en la interpretación y aplicación del derecho llamado a regir ese hecho ya intangiblemente determinado. Por consiguiente, si el recurso se construye a partir de hechos que el fallo no ha tenido por probados o se refiere a hechos distintos de los asentados, la nulidad habrá de ser evidentemente desestimada

DÉCIMO SÉPTIMO: Que resulta relevante para ello señalar que la sentencia impugnada, en su motivo octavo, consignó los presupuestos de hecho que se tuvieron como establecidos, de la evidencia testimonial, fotográfica y pericial que generó el persecutor y querellante, y que permitió tener por probado *“Que el 12 de abril del 2018, la víctima María Isabel Díaz Moyano fue impactada por el vehículo conducido por el acusado en zona donde no existía paso de cebra, a una velocidad del más de 98 kilómetros por hora, siendo la permitida no superior a 70 kilómetros, golpeándola y causándole la muerte en forma inmediata.*

La acción que se ha descrito cumple con las exigencias del tipo culposo por el que se formuló requerimiento.

Que para concluir lo anterior esta sentenciadora tiene presente que a la peatón no pudo exigírsele una conducta distinta a la realizada, teniendo presente que la única manera de llegar al paradero donde tomaba la micro para ir a la escuela en Los Andes, era cruzando la vía, que la occisa tomó todas las precauciones del caso antes de cruzar, esto es mirar para todos los lados y cruzar, que a los peatones no se les exige por ley uso de chalecos reflectantes o similares, que esto está reservado para vehículos o sus conductores.



Que la menor cruzó a pasos de su domicilio vistiendo uniforme escolar, que si el color de este era oscuro no es imputable a la menor. Que a mayor abundamiento los pasos de cebra en la ruta 60 CH estaban a varios kilómetros del lugar donde sucedieron los hechos.

Que estando oscuro, en una zona rural poblada y con limitaciones de velocidad, el conductor del vehículo, es quien debe reducir velocidad, tomar precauciones, que pretender que la peatón no cruce por la vía es imposible, que en la ruta existía zona de paraderos, señalética de peatones en la vía, limitaciones de velocidad, son condiciones reglamentarias que el conductor debió prever, sabiendo además la existencia de estas, según sus dichos pasaba por ese sector hace años y todos los días.

La conducta, por tanto, importó infringir las normas de tránsito que regulan la circulación vial.

De este modo se ejecutó una acción en forma negligente que infringió la ley de tránsito, creando el autor una situación de riesgo relevante para el tipo penal y que ha devenido en un resultado lesivo, encontrándose ambos extremos cubiertos por el tipo penal. De haber observado las normas referidas en el párrafo que antecede, el agente podría haber evitado el resultado, el que, como se dirá solo se explica por su acción.

Como se ha dicho, la conducta del sujeto activo (conductor del vehículo) fue la causa de la muerte de la víctima, quien cruzó por donde correspondía, no con preferencia por cuanto no era zona de cebras, pero con los cuidados necesarios y exigibles a su carácter de peatón en un nudo vial que no la favorecía, pero en el cual existían señales de tránsito que advertían peatones, paraderos y



velocidades máximas para vehículos, lo cual fue inobservado por el actor, quien pudo haber realizado la maniobra observando el cuidado esperable en la conducción del vehículo motorizado, de manera que podría haber evitado la realización del tipo delictivo. En las condiciones descritas, el actuar del conductor es el que genera el peligro y el resultado típico, antijurídico, culpable siendo el sujeto que condujo de manera imprudente su vehículo y que al hacerlo atropelló a la afectada causándole la muerte inmediata por la fuerza del impacto, la velocidad del móvil y las lesiones causadas.

De acuerdo a la estructura de los tipos imprudentes, en relación a este ilícito, la observancia del acusado de las normas de tránsito antes referidas, lo habría dejado en posición de evitar la realización del tipo penal, cuestión que como ya se ha explicado no hizo, de modo que éste le es imputable a título de imprudencia.

La autoría del acusado fue demostrada con la evidencia analizada, el referir los testigos a aquél como la persona que realizó la conducta imprudente. En especial con la madre de la occisa, quien vio el vehículo conducido por el acusado a velocidad alta impactando a su hija a pocos metros de donde había empezado a cruzar la vía para volver a su casa porque la micro no le paró, atropellándola y causando su muerte en el sitio del suceso, no pudiendo el SAMU hacer maniobras de animación. Igualmente fue referido por el funcionario policial quien relata tal circunstancia, de esta forma se permite establecer con certeza que es el autor directo e inmediato del cuasidelito de homicidio que afectó a María Isabel Díaz Moyano fue Jaime Carvajal Quintero de acuerdo al artículo 15 N° 1 del Código Penal”



DÉCIMO OCTAVO: Que en la especie la defensa ha cuestionado que se haya condenado al sentenciado como autor de cuasidelito de homicidio, en circunstancias que fue la víctima quien habría infringido las normas del tránsito al cruzar por un paso no habilitado.

Que, la causal invocada procede cuando en el pronunciamiento del fallo se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho, por lo que éste motivo de invalidación dice relación con el contenido de la sentencia impugnada , en particular, con las consideraciones de derecho tenidas en vista por los jueces del fondo para calificar un hecho como delito, como también respecto de las circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal del acusado, ya sea al fijar la naturaleza y el grado de la pena.

Luego, el reproche debe estar referido a una errónea aplicación de la ley sustantiva penal en relación tanto a la calificación jurídica de los hechos como de la participación culpable, o que determinen finalmente una condena o absolución de alguien con motivo de una persecución penal y sobre la base de una acusación que especifique las situaciones de imputabilidad respecto de un sujeto.

DÉCIMO NOVENO: Que conforme a lo examinado en los motivos 8° y 9° del fallo recurrido, la sentenciadora del tribunal a quo, ha razonado en torno a la conducta imprudente y negligente del condenado, quien conducía el vehículo a una velocidad no permitida, en un sector en el que existían señales de tránsito que advertían peatones, paraderos y velocidades máximas para vehículos, que éste transgredió conduciendo el suyo sin el cuidado esperado e incumpliendo las normas de tránsito.



En consecuencia, se estima que se ha hecho una correcta interpretación de las normas, las que son suficientes para rechazar el recurso de nulidad interpuesto, por cuanto independiente de la actuación de la víctima, -quien tomo las precauciones para cruzar- lo cierto es que quedó asentado que el condenado, actuó en forma despreocupada, descuidada e imprudente, que no estuvo atento a las condiciones del tránsito y que infringió la normativa vial, en razón de lo cual habrá de desestimarse el recurso de nulidad basado en la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, en que ha sustentado su recurso la defensa del sentenciado.

VIGÉSIMO: Que, como causal subsidiaria de nulidad, la defensa invocó aquella contenida en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 342, letra c), en relación con el inciso 1° del artículo 297 del mismo cuerpo de normas.

Refiere que la necesidad de motivar las sentencias permite al justiciable y a la sociedad en general conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y facilitar el control de la racionalidad y corrección técnica de la decisión por el tribunal que revise la resolución. Agrega que, es fundamental explicar con el máximo de detalles la convicción de condena, para que la sociedad comprenda las razones contenidas en las decisiones jurisdiccionales, basada en una actividad que ha permitido dar por comprobados hechos y circunstancias básicas relativas a la existencia de un suceso punible y a la culpabilidad del imputado, lo que no habría ocurrido, desde que el tribunal condena al imputado a una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, sin expresar motivos o razones algunas para la imposición de dicha pena.



Pide que se invalide la sentencia y el juicio, y que se ordene la realización de un nuevo juicio oral por un Tribunal Oral en lo Penal no inhabilitado.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que en lo tocante al motivo de nulidad subsidiario explicitado a través de la proposición de la causal de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal en armonía con el artículo 342 letra c) del mismo cuerpo de leyes, cabe reiterar que aquel se refiere a la omisión, en la sentencia, de alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, indicando que ello ocurre en relación a los elementos que la letra c) de esta última disposición ordena observar, esto es: “La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y la valoración de los medios de prueba que fundamentare dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”. A su vez, esta última norma prescribe “Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiese desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia”.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, examinada la sentencia recurrida, esta Corte -contrariamente a lo estimado por la defensa - considera que el fallo cumple



suficientemente con la exigencia que establece el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, por cuanto explicita con suficiente inteligencia los hechos del juicio y relaciona latamente la prueba rendida que sirvió de base a su decisión condenatoria, permitiendo la fundamentación del fallo reproducir el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llega la sentencia, tal como exige el inciso tercero del artículo 297 del Código Procesal Penal.

A este respecto, es menester recordar que el legislador otorga a los jueces plena libertad respecto de la valoración de la prueba, y no resulta posible que a través del recurso de nulidad se discuta la apreciación que ellos, de manera libre, han efectuado, y sólo le compete a la Corte revisar si el fallo ha cumplido o no con los requisitos formales. La sentencia atacada cumple, sin merecer reproche, con tales circunstancias.

VIGÉSIMO TERCERO: Que en torno a lo sostenido en el recurso en cuanto al incumplimiento de la obligación de fundamentar el fallo en lo que dice relación con la alegación de la defensa relativa a la calidad de causa accesoria de la variante velocidad en el resultado del accidente y a la inevitabilidad del atropello, como se ha indicado previamente, se ha asentado que la sentenciadora arribó a la decisión de condenar al encartado por su actuar negligente, temerario e imprudente. Un accidente de tránsito no es un hecho fortuito, la mayoría de las veces se trata de hechos culposos, y previsibles, y por lo tanto, prevenibles o evitables.

En efecto el reproche que la defensa denuncia en el fallo no es tal desde que como se ha señalado, la sentenciadora en los motivos 8° y 9° efectuó una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias



que se dieron por probados y la valoración de los medios de prueba que sustentaron esas conclusiones, en especial la fundamentación referida para arribar a una condena, que aparece de la sola lectura del fallo impugnado, de la que queda de manifiesto que la molestia real del recurrente está circunscrita a la valoración efectuada por el tribunal, la que no comparte.

Por ello, la circunstancia de no compartir el recurrente las conclusiones del tribunal en cuanto a la fundamentación, es decir, la valoración de la prueba producida, no supone automáticamente su impugnación por esta vía, en donde se ha denunciado la falta o ausencia de análisis completo de la prueba rendida y de los argumentos de la defensa, extremos que no concurren pues quedó demostrado que las pruebas y cuestionamientos formulados en torno a ella fueron efectivamente considerados y valorados, sin contradecir aquellos parámetros.

Conforme lo antes expuesto, el motivo de nulidad en comento no podrá prosperar.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en consecuencia, al no haberse configurado ninguna de las hipótesis de nulidad invocadas por la defensa del acusado, el arbitrio en análisis será rechazado en todos sus extremos.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 372, 373 letra a) y b), 374 letra c), y, 384 del Código Procesal, **se rechaza** el recurso de nulidad promovido por la defensa del **sentenciado Jaime Carvajal Quintero**, en contra de la sentencia de cuatro de mayo de dos mil veintiuno y contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC 1810046606-2, RIT N° 2662-2018, del Juzgado de Garantía de Los Andes, los que en consecuencia, **no son nulos**.



Redacción a cargo de la Abogado Integrante Sra. Pía Tavorari.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 39.453-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por el Ministro Sr. Jorge Dahm O., los Ministros Suplentes Sres. Raúl Mera M., Miguel Vázquez P., y las Abogadas Integrantes Sras. Pía Tavorari G., y Leonor Etcheberry C. No firman las Abogadas Integrantes Sras. Tavorari y Etcheberry, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ambas ausentes.



En Santiago, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

